

Comunicado de Prensa: Dr. Rodulio Perdomo

La salud, seguridad y protección social, suponen una erogación de 30 mil millones de lempiras en 2010, lo que equivale al 10.4% del PIB, , “bajo esta cifra se incluyen tanto los gastos propiamente de asistencia a algunos de los más necesitados, así como las erogaciones de los institutos de previsión social y todo lo concerniente a la Secretaría de Salud; a pesar de esta gran magnitud de recursos financieros vertidos no existe ninguna garantía de que se trate de un todo ordenado que permita cubrir las necesidades de aquellos que realmente necesitan el apoyo de la entidad estatal. Se trate de Bonos tradicionales como los del PRAF o de los nuevos Bonos 10 mil, de la presente administración, existe la posibilidad real de que miles de familias se encuentran excluidas y; además, que miles de las familias cubiertas no sean tan pobres pero fundamentalmente debido a problemas metodológicos de la focalización que ameritan su corrección “ continuó exponiendo el docente universitario y consultor Rodulio Perdomo, el segundo día (6) del seminario-taller “Revisión y Valoración de los Estudios de Empleo y Protección Social en Honduras”, realizado en Tegucigalpa del 5 al 9 de septiembre de 2011

Gracias a la propuesta metodológica del SPER (Social Protection Expenditure Review), creada por la OIT, ahora es posible disponer de una herramienta de análisis, que no solamente identifica dispositivos de protección social sino que; además, indica elementos faltantes para disponer de una visión más completa de los riesgos sociales a los que los ciudadanos se enfrentan, dijo Perdomo. La forma de concebir la protección social hace que en los últimos gobiernos se mantenga una perspectiva fragmentaria e incompleta: “se ha venido trabajando en una política de Protección Social en la que se toman en consideración al menos 16 grupos definidos como sujetos preferentes, que van desde los niños y niñas de 0-5 años, hasta la población en áreas de desastres”, continuó diciendo.

Como alternativa a esta perspectiva más restringida de protección social, la OIT propone una concepción más global y articuladora para disponer de varios escenarios de mayor utilidad en cuanto a que los gobiernos pueden precisar el aseguramiento y la cobertura gradual de protección social de aquellos hondureños históricamente más postergados. Pero para lograr esta finalidad es necesario disponer primero de las modelizaciones que surgen de herramientas como el SPER. .

Lo anterior va sin mencionar que la asistencia social ha venido abarcando a casi el 50% de la población en extrema pobreza, mediante diferentes formas de subsidio y transferencias monetarias condicionadas, situación que, no obstante, se interrumpe cada cuatro años, por el cambio de los gobiernos en el poder.

En lo referente a la Seguridad y Previsión Social, Perdomo continuó apuntando, que de los beneficiados con la cobertura, solo el 23% de la PEA, refleja la magnitud de la brecha en estas áreas y sugiere la naturaleza de los desafíos que el país enfrenta para los próximos años.

En el Plan de Nación-Visión de País 2010-2038, cabe mencionar, que la meta de aseguramiento es el principal problema pues la incorporación gradual de la PEA representa atender de manera prioritaria a la población asalariada que es la que acumula los mayores déficits de cobertura en materia de Seguridad Social, acotó.

“La situación se reduciría si se contara con un escenario con recursos y una voluntad de ordenamiento de las competencias que focalicen los hogares y personas que puedan entrar en un esquema de aseguramiento, sin dejar por fuera la asistencia social de mediano y largo plazo a aquellas personas, cuyas circunstancias especiales de la vida ameriten el subsidio del Estado, del aseguramiento previsional” finalizó el exponente de este trabajo.